

mación parental, con apoyo tecnológico que entregue orientación a las familias y con sistemas de evaluación simples pero efectivos.

Jorge Porter Taschkewitz

Emergencia en convivencia

● Los hechos de violencia que hemos visto en los últimos días, como los ocurridos en Calama, Curicó y Providencia, nos remueven y nos invitan a tener una mirada más reflexiva respecto a lo que viven en su cotidianidad nuestros niños, niñas y adolescentes. Frente a estas situaciones, es natural que surjan propuestas más duras o medidas inmediatas: sin embargo, es imperativo abordar el problema con mayor profundidad para poder trabajar a través de un mecanismo que logre mermar las conductas de violencia temprana desde su origen.

El progresivo deterioro de la salud mental de nuestros estudiantes es innegable: según UNICEF, las consultas de salud mental infanto-juvenil aumentaron un 88% en los últimos años, cifra que se evidencia en los conflictos de convivencia escolar e impacta de manera directa en nuestras aulas.

Detrás de cada estudiante existe una historia, un contexto y un ambiente sociofamiliar que otorga un escenario, el cual debemos considerar no sólo para ser abordado en su particularidad, sino que también para poder actuar de manera coherente y efectiva en un trabajo mancomunado entre familia y colegio.

El desafío es compartido, tanto el nú-

cleo familiar como el establecimiento educacional son protagonistas y agentes activos del desarrollo de niños, niñas y adolescentes en proceso de formación, y ambos tienen un rol clave en construir entornos donde se establezcan límites, espacios de contención, escucha y acompañamientos sistemáticos.

No hay duda de que tenemos en frente una gran tarea para poder revertir este complejo escenario que tiene a nuestras comunidades educativas altamente desafiadas. Hoy menos que nunca podemos dejar esta tarea pendiente.

María José Howard Irrázaval
Directora de Salvaguarda de la red de colegios Cognita

Aproximación más integral

● El asesinato de una inspectora en Calama y otros episodios recientes de violencia en establecimientos educacionales evidencian una relación creciente entre educación y delincuencia, cuya reiteración sugiere un problema de carácter estructural.

La evidencia indica que la desvinculación escolar, el deterioro de la convivencia y el debilitamiento de la autoridad pedagógica reducen la capacidad preventiva de la escuela. En este contexto, su función como espacio de integración social se ve limitada, aumentando la exposición a trayectorias de riesgo.

A ello se suma el impacto de las redes sociales y los desafíos en salud mental juvenil. Organismos como UNICEF y la Organización Mundial de la Salud han